



**DEMOCRACIA, DERECHOS
HUMANOS Y ESPACIO
CÍVICO**

RELEVANCIA

La próxima Cumbre UE-CELAC se enmarca en un contexto de crisis global de la democracia liberal caracterizado por el debilitamiento institucional, crecientes violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento del estado de derecho en el marco de un creciente agotamiento del orden global internacional.¹

En varios países del mundo, la falta de respuestas efectivas a problemas sociales clave como el desempleo, la inflación, la inseguridad, el acceso a la educación y los servicios de salud por parte de gobiernos percibidos como ineficientes y al servicio de grupos minoritarios ha llevado a una frustración generalizada de la población con la democracia.² En Europa y América Latina y el Caribe (LAC), la búsqueda de soluciones rápidas a estos problemas, así como de un futuro más próspero, ha precipitado el surgimiento de alternativas populistas de extrema derecha y autoritarias que debilitan la institucionalidad democrática, aumentan las desigualdades, restringen el espacio cívico y fomentan las agendas antiderechos.³ Este tipo de alternativas o gobiernos desafían las normas internacionales, la relevancia de la agenda de los ODS, desacreditan públicamente a los organismos y foros multilaterales y regionales, dificultando la construcción de consensos y soluciones conjuntas a problemáticas comunes e interconectadas.

Diagnóstico de la situación en Europa y América Latina y el Caribe

La crisis de la democracia asume características particulares en cada región. En América Latina y el Caribe, esta crisis se enmarca en un contexto de desigualdad extrema, discriminación, necesidades básicas insatisfechas, crisis climática, una escalada de la violencia y altos niveles de corrupción.⁴ En ambas regiones se observa la expansión de economías ilegales y una fuerte polarización política.

¹ Más ampliamente, estamos asistiendo a la crisis del orden global basado en la democracia liberal y el libre mercado, así como en un conjunto de reglas y organismos internacionales que han servido como marco de referencia de las relaciones entre las regiones y países del mundo. Se trata de un contexto en el que los límites de la globalización se evidencian simultáneamente con la multiplicación de los conflictos bélicos y la disputa abierta entre Estados Unidos y China.

² De acuerdo con el Latinobarómetro 2024, todos los países de la región registran una satisfacción con la democracia inferior al 50%, a excepción de Uruguay, El Salvador y México. En Honduras, Ecuador y Colombia sólo el 18, 19 y 20% de la población está satisfecha con la democracia. Perú y Bolivia registraron apenas un 10% de satisfacción con la democracia. <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp> Según el Índice de Percepción de la Democracia, en la UE el 57% de las personas considera que sus países de origen son democráticos. En Hungría, solo el 31% de los ciudadanos considera que su país es una democracia; solo el 43% de los griegos piensa que su país es democrático y apenas el 46% de franceses hace lo propio. Ver: <https://es.euronews.com/my-europe/2024/05/08/el-descontento-con-la-democracia-crece-en-algunas-partes-de-europa-segun-un-estudio-intern>

³ En las últimas décadas, en América Latina y Europa, se habían consolidado corrientes políticas que pusieron en la agenda temas como el matrimonio igualitario, la unión civil, el aborto. Este es un eje que les ha permitido organizar un contramovimiento nacional, regional y global y es un componente clave de la polarización que hoy define la política en todo el mundo.

Concentración de poder, autoritarismo y desigualdades

En la mayoría de los países de LAC, la erosión de las instituciones democráticas se observa en la creciente concentración de poder en el poder ejecutivo en detrimento de los otros poderes del Estado, facilitando el autoritarismo en algunos países, como es el caso de El Salvador y Ecuador, y la consolidación de las dictaduras en Venezuela y Nicaragua.⁵ En la región, la falta de transparencia y el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos fomentan la corrupción y promueven la influencia indebida de élites económicas y políticas en la formulación de políticas públicas y la aplicación de la justicia. Como resultado, en muchos países de la región las políticas públicas responden a los intereses de unos pocos en detrimento del bien común, vulnerando de manera desproporcionada los derechos de los grupos menos favorecidos, como las mujeres, las niñas, las diversidades sexo-genéricas, las juventudes, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los migrantes, los afrodescendientes y las personas con discapacidad. Al enfrentar múltiples formas de discriminación, las demandas suelen ser desestimadas, lo cual restringe aún más sus derechos. A esto se suma el avance de movimientos conservadores que buscan dismantelar los logros en igualdad de género e inclusión que amenazan con revertir décadas de progreso en materia de derechos humanos y equidad.⁶ Por otro lado, en el marco de las nuevas políticas de expulsión de migrantes del gobierno de Trump y el ascenso de la ultraderecha en muchos países de Europa, ha crecido la estigmatización y criminalización de los migrantes, a quienes se asocia con el crecimiento de las economías ilegales y del crimen.

Falta de independencia Judicial

A ambos lados del Atlántico se observa la injerencia de otros poderes del Estado en el poder judicial, lo que dificulta el cumplimiento de las leyes de manera eficaz e imparcial. Según el Informe sobre el Estado de Derecho 2022, la percepción sobre la independencia judicial en España, Italia, Bulgaria, Eslovaquia, Polonia y Croacia es muy baja, mientras que en Hungría se observa una creciente injerencia política en el poder judicial.⁷

En LAC, en países como Brasil, México, Bolivia y Honduras, la destitución y el nombramiento de jueces

⁴ Las Américas obtienen 42 puntos sobre 100 posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, el cual mide el nivel percibido de corrupción en el sector público. <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>. Según este índice la percepción de corrupción en Europa Occidental y la EU ha aumentado: <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2024-western-europe-eu-leaders-hollow-efforts-cause-worsening-corruption-levels>

⁵ En otros países, como Perú, la concentración de poder con la misma lógica autoritaria se hace desde el Congreso que subordina al Ejecutivo y se declara el primer poder del Estado.

⁶ Estos sectores cuestionan las políticas y leyes que reconocen los derechos de las mujeres y las diversidades y que sancionan la violencia de género que una problemática muy grave en la región: <https://elpais.com/argentina/2025-01-24/milei-pedira-al-congreso-el-fin-de-la-figura-de-feminicidio-y-las-leyes-de-paridad-de-genero.html>

⁷ https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/news/commission-considers-hungarys-judicial-reform-addressed-deficiencies-judicial-independence-maintains-2023-12-13_en

y fiscales por otros poderes del Estado, mediante procesos opacos y, en algunos casos, ilegales, han socavado la independencia del poder judicial fomentando la impunidad de los poderosos. En muchos países de la región se ha instrumentalizado a la justicia y se la ha puesto al servicio del gobierno. Por ejemplo, en las últimas elecciones en Guatemala, El Salvador y Venezuela, los ejecutivos han utilizado al poder judicial y los órganos electorales para manipular las elecciones con el fin de favorecer a los gobiernos de turno o para perpetuarse en el poder, poniendo en riesgo las reglas de juego básicas de la democracia y vulnerando la voluntad de los pueblos.⁸

Este conjunto de factores, sumado a los escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios y poderosos, en el caso de América Latina, ha socavado la confianza de los ciudadanos europeos y latinoamericanos en la capacidad de las instituciones democráticas para velar por el bien común y proveer servicios públicos de calidad.⁹ Al mismo tiempo, las redes sociales imprimen una velocidad a las demandas sociales que los Estados de ambos continentes no pueden procesar, aumentando la frustración ciudadana y profundizando las condiciones para el populismo y la autocracia.

Reducción del espacio cívico

La reducción del espacio cívico es otra de las grandes manifestaciones de la crisis de la democracia, ya que impide a las personas ejercer los derechos fundamentales que necesita toda democracia saludable.¹⁰ En varios países del mundo, el uso indiscriminado de la fuerza contra manifestaciones sociales, la criminalización de la protesta, la persecución política, las restricciones a la libertad de expresión, prensa y asociación resultan cada vez más comunes. En LAC, se observa, de forma cada vez más frecuente, la criminalización y los ataques violentos directos contra organizaciones de la sociedad civil (OSC), periodistas y activistas para desacreditar su trabajo y silenciar las voces críticas. Estos grupos enfrentan violencias digitales, como la difamación basada en desinformación, la intimidación, el acoso y la vigilancia. Así mismo, tanto en Europa como en LAC hay gobiernos que buscan limitar y criminalizar a las OSC mediante iniciativas o legislación “anti-ONG”. Este es el caso de Vene-

⁸ En Perú, mediante el quiebre del equilibrio de poderes, se ha producido una alta concentración del poder en una coalición autoritaria y conservadora en el Congreso, que ha puesto a su servicio al Gobierno y ha dado pasos significativos hacia el control de todas las instituciones. En la actualidad, se está produciendo un plan de copamiento del sistema electoral por parte de esta coalición.

⁹ En Europa, solo el 43% de los franceses y el 31% de los húngaros consideran que su país es plenamente democrático. <https://es.euro-news.com/my-europe/2024/05/08/el-descontento-con-la-democracia-crece-en-algunas-partes-de-europa-segun-un-estudio-intern>, Latinobarómetro 2024: <https://www.latinobarometro.org/lat.jsp>

¹⁰ De acuerdo con el Civicus Monitor 2024, las mujeres, incluidos los grupos que abogan por sus derechos y las mujeres defensoras de derechos humanos, se encuentran entre los grupos más vulnerables a recibir ataques. Por otro lado, según Global Witness, América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales. En 2023, el 85% de los asesinatos de defensores medioambientales ocurrieron en la región, siendo Colombia el país más peligroso para este tipo de defensores.

¹¹ En Europa gobiernos conservadores y parlamentarios europeos están abogando por reducir la ayuda al desarrollo y el apoyo financiero a organizaciones de la sociedad civil:

<https://www.politico.eu/article/europe-conservative-target-ngo-financing-rules-eu-taxpayer-money/>, <https://www.dutchnews.nl/2024/11/dutch-aid-minister-to-cut-e1-billion-from-budget-for-ngos/> <https://www.politico.eu/article/fears-over-health-ngos-future-as-massive-eu-funding-cut-looms/>

zuela, Nicaragua, El Salvador, Perú, Hungría, Serbia y Turquía. Finalmente, es importante mencionar que el reciente congelamiento de las ayudas de la cooperación estadounidense y los recortes a la financiación a las OSC en Europa están restringiendo aún más al espacio cívico al poner en peligro la sostenibilidad financiera y la existencia de las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo independiente, sobre todo en el caso de los países latinoamericanos y caribeños.¹¹

Crimen organizado transnacional, corrupción y economías ilícitas

El avance del crimen organizado transnacional es un problema serio en ambas regiones. En LAC, el auge del tráfico de drogas, la tala ilegal, los incendios forestales provocados, la minería ilegal, el tráfico de fauna y la trata de personas acarrea consecuencias humanitarias severas para las comunidades, sumado a los efectos devastadores para el medio ambiente y los territorios ancestrales de las poblaciones indígenas.¹² Estas economías ilícitas impactan de manera negativa el PIB de los países y la recaudación de ingresos estatales, reduciendo las capacidades de los Estados de garantizar derechos económicos y sociales de las poblaciones. Así mismo, promueven la violencia y la migración forzada imponiendo amenazas importantes a la paz y la seguridad con impactos en Europa y en otras partes del mundo.¹² En ambos lados del Atlántico, las actividades del crimen organizado se sostienen gracias a la participación directa o la colaboración de funcionarios públicos de todos los rangos.¹³ De acuerdo con Europol, el 60% de las actividades criminales en Europa se nutre de la corrupción.¹⁴ Cabe destacar que, para lavar sus ganancias ilícitas, el crimen organizado abusa de los sistemas financieros globales y coopera con “facilitadores”, como bancos, abogados, contadores, agentes inmobiliarios y de productos de lujo ubicados, en su mayoría, en el Norte Global, incluyendo países europeos.

Recomendaciones estratégicas

La crisis de la democracia en América Latina y Europa es un fenómeno complejo que requiere abordarse integralmente y desde múltiples dimensiones. Con base en los valores comunes de respeto por la democracia y los derechos humanos, llamamos a la Unión Europea y la CELAC a la búsqueda de soluciones conjuntas para garantizar la paz y avanzar en la construcción de sociedades más democráticas, resilientes e inclusivas.

Apostamos por la recuperación y renovación del sentido de la democracia representativa y participativa, cuya práctica social se sostiene sobre tres ejes fundamentales: (a) el pleno ejercicio de la ciuda-

¹² <https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2021/02/El-itinerario-de-la-cocai%CC%81na-hacia-Europa-InSight-Crime-Global-Initiative.pdf>, Bergman, Marcelo (2023): El negocio del crimen. El crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. Ver también, Carrión, Fernando (2024): La producción social de las violencias en Ecuador y América Latina. Histórica, estructural, plural y relacional, FLACSO Ecuador-FES-ILDIS, Quito

¹³ <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2022-americas-corruption-criminal-networks-human-rights-abuses>

¹⁴ <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/serious-and-organised-crime-in-eu-corrupting-influence>

danía en sus dimensiones básicas: pertenencia, derechos y participación; (b) la recuperación de su función social, orientada a la promoción de la equidad distributiva, otorgando prioridad al bien común sobre intereses particulares; (c) la gestión abierta del espacio público por medio de la participación ciudadana al nivel más alto posible, combinando formas de participación directa y representativas, es decir, la generación de espacios públicos estatales y no estatales de participación y control ciudadano efectivo.

1) Defender y fortalecer los espacios cívicos y de participación ciudadana que pugnan por garantizar la indispensable transparencia de la democracia y sus instituciones

Ubicar de manera coherente la democracia y los derechos humanos en el centro de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina.

- Los acuerdos comerciales y de asociación con la región deben hacer efectivas sus cláusulas vinculantes sobre derechos humanos y democracia, así como garantizar espacios de monitoreo y participación real para la sociedad civil.
- Asegurar que todas las inversiones europeas en América Latina y el Caribe, incluyendo las inversiones de Global Gateway y los acuerdos estratégicos de materias primas críticas, cuenten con mecanismos robustos, transparentes y suficientes de medición de impacto y de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente para garantizar que dichos proyectos no contribuyan a deteriorar el cierre del espacio cívico en los territorios ni beneficien a actores corruptos o al crimen organizado.

Construir un ecosistema digital más seguro, transparente y democrático

- Abogar por regulaciones que obliguen a las redes sociales y plataformas tecnológicas a ser transparentes sobre sus algoritmos y el uso de datos para proteger a los usuarios de la desinformación y los ataques digitales, estableciendo mecanismos claros para la detección y eliminación de contenido falso y malicioso.
- Procurar la alfabetización digital desde temprana edad, empoderando a la ciudadanía con las herramientas necesarias para discernir entre información veraz y falsa, y fomentar el pensamiento crítico en el entorno digital.

Apoyar de forma decidida a las personas defensoras de los derechos humanos en ambas regiones

- Promover mecanismos preventivos de protección a personas defensoras de derechos

humanos por medio de programas de capacitación a los funcionarios públicos, así como el apoyo a las investigaciones de amenazas.

- Promover legislación y políticas de protección de defensores efectivos y garantizar su financiamiento.
- Crear espacios de diálogo y participación de forma regular que sean accesibles en términos físicos, idiomáticos y de capacidad técnica y que cuenten con recursos financieros suficientes para garantizar su funcionamiento.
- Reforzar los programas de apoyo existentes, asegurando que los mecanismos lleguen a las zonas rurales y de más difícil acceso, manteniendo reuniones regulares con las personas defensoras, realizando visitas sistemáticas a las comunidades cuyas personas defensoras están en alto riesgo.
- Promover y facilitar espacios seguros para la interacción entre personas defensoras, y entre ellas y otras partes relevantes.
- Acompañar a los programas de protección con compromiso político, de manera pública cuando sea necesario, particularmente en casos de criminalización y encarcelamiento.
- Garantizar la protección de lideresas feministas, quienes enfrentan altos niveles de violencia y criminalización en la región.

2) Promover los derechos y la participación de las mujeres jóvenes, los pueblos étnicos y otros grupos históricamente excluidos en la formulación, implementación y evaluación de políticas que reduzcan la desigualdad económica y social

- Asegurar la no regresión en las legislaciones de derechos de las mujeres, el monitoreo y la rendición de cuentas.
- Exigir a los gobiernos compromisos claros para fortalecer la lucha contra el feminicidio y la violencia de género, con políticas de prevención, sanción y reparación.
- Rechazar iniciativas que busquen restringir los derechos sexuales y reproductivos en la región y promover el acceso equitativo a servicios de salud reproductiva, incluyendo educación sexual integral, anticoncepción y acceso seguro al aborto, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

- Garantizar la inclusión de las mujeres en la economía verde y digital para promover su participación en los empleos del futuro y en la transición ecológica justa.
- Asegurar que las políticas climáticas incluyan medidas específicas para mitigar el impacto de la crisis climática en mujeres y comunidades vulnerables.

3) El fortalecimiento del equilibrio de poderes, la independencia del poder judicial y los órganos electorales son componentes neurálgicos de la democracia

- **Poder Judicial.** Los nombramientos y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes y con base en la experiencia y el desempeño para evitar la injerencia de otros poderes del Estado. Es fundamental la apertura de las declaraciones de bienes de jueces y funcionarios públicos para prevenir conflictos de intereses. Los jueces y fiscales honestos deben tener garantías para poder llevar a cabo su labor sin injerencias, presiones ni amenazas con el fin de avanzar en las investigaciones e imponer sanciones.
- **Órganos electorales.** Fortalecer la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas de los órganos electorales para proteger la integridad de los procesos y asegurar la imparcialidad de las instituciones y los mecanismos de supervisión electoral nacional, así como establecer mecanismos de consulta con la sociedad civil que cuenten con suficientes recursos.

4) Lucha contra la corrupción y el crimen organizado

- Desarrollar políticas de lucha contra el crimen organizado que incorporen la batalla contra la corrupción y se centren en los derechos humanos.
- Promover el financiamiento transparente de la política y la rendición de cuentas para evitar la influencia indebida y la cooptación de las instituciones públicas por parte de grupos de interés y del crimen organizado.
- Proporcionar capacitación especializada y apoyo técnico a los policías, investigadores y fiscales que trabajan en casos complejos de crimen organizado y corrupción, así como implementar mecanismos integrales de protección de denunciantes, que garanticen el anonimato y la protección contra represalias.
- Promover las investigaciones transfronterizas, el intercambio de información de inteligencia.

- Fortalecer la transparencia en materia de beneficiarios reales (los dueños reales de las empresas) para avanzar en las investigaciones y reducir la impunidad.
- Promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra el lavado de dinero y fortalecer la regulación de los contadores, instituciones financieras y abogados que facilitan los flujos financieros ilícitos provenientes de la corrupción y del crimen organizado.
- Fortalecer los sistemas tributarios nacionales y la tributación de las grandes corporaciones digitales en los países donde realizan sus negocios.





**Grupo de trabajo
de Sociedad Civil
CELAC-UE**